

VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004.

# **Subjetividad y Partidos políticos; las nuevas formas de relación entre el voto y la representación política.**

Héctor Osvaldo Coira.

Cita:

Héctor Osvaldo Coira (2004). *Subjetividad y Partidos políticos; las nuevas formas de relación entre el voto y la representación política. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-045/644>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

## **Subjetividad y Partidos políticos; las nuevas formas de relación entre el voto y la representación política.**

Héctor Osvaldo Coira,

Fac. de Ciencias Sociales UBA [osvcoira@yahoo.com.ar](mailto:osvcoira@yahoo.com.ar)

### **El problema de la democracia**

Los autores teóricos de las bases de la democracia moderna, o al menos a quienes se les atribuye tal tarea, me refiero a los iusnaturalistas, tuvieron como problema en común el trabajo de pensar un orden político que sustituyera al antiguo régimen de dominación que declinaba y, abriera paso a un sistema que resolviera el caos que se manifestaba al deteriorarse las relaciones en las que se sustentaba la legitimidad del antiguo régimen. De una u otra forma, de acuerdo con el pensador que se tome, el problema a resolver era como fundar un sistema de creencias que fuera universalmente aceptada, para poder otorgarle estabilidad y previsibilidad a un determinado orden social.

La figura del soberano, al declinar la legitimidad divina, concentraba sobre sí todas las virtudes -y lo que es más importante- todas las culpas de un régimen de dominación desigual. En pocas palabras, el soberano estaba demasiado expuesto.

Nos encontramos entonces frente al nacimiento de la idea del “pueblo soberano”, es decir, naturalizar la idea de que el pueblo se determina a sí mismo, y lo que es más importante, siendo éste súbdito y soberano a la vez difícilmente pudiera derroscarse a sí mismo. No pretendo profundizar demasiado en las distintas corrientes que parten de estos postulados, pero sí tener

presentes algunos conceptos preformativos a cerca de la democracia, puesto que son parte integrante del sentido común que manejamos a diario y es necesario desenterrarlos para poder analizar con más claridad, el problema que mueve a este trabajo.

Volviendo entonces a dichos pensadores, es claro que son plenamente conscientes que están elaborando una ficción y lo peculiar de este modo de legitimar un planteo político, es presentar bajo la retórica de la *descripción* natural o analítica, lo que desde el comienzo es y no puede ser de otra manera, una *prescripción*. Es decir no es válida la crítica que se les hace por lo que ellos crean que verdaderamente están describiendo. Aquí la verdad o falsedad no tienen la menor relevancia, aquí lo único que entra en juego es: Cómo legitimar un ideal de convivencia. Dicho de otra forma, partiendo de un determinado ideal de convivencia, la época marca una forma argumentativa, retórica, digamos de legitimarlo. Lo característico de estos pensadores es que, en función del tipo de ideal político que tienen para proponer y para intentar que se ponga en práctica, parten de una ficción que elaboran en función de la manera que entienden que es la mejor para justificar ese ideal político.

La argumentación viene en función del ideal político y no al revés. Es decir aquellos autores eran perfectamente conscientes que lo que estaban elaborando era un género que podría llamarse “ficción política” y no tienen por que respetar ningún tipo lógico analítico, en la medida en que ese tipo de racionalidad no pertenece a este registro. Habría que ver a que registro pertenece, pero es un problema en que no quiero entrar. Lo cierto es que si se invoca una regla lógica dentro de un discurso político, no se hace lógica o epistemología, se está haciendo política. Es importante tener presente estas

ideas al analizar los motivos que se invocan, desde el orden económico hegemónico, al naturalizar los supuestos sobre los que se funda la legitimidad de las democracias neoliberales.

### **El problema de la legitimidad**

Siguiendo con la misma línea de pensamiento, la legitimidad tampoco se sustenta en una arquitectura, lógica, natural y racional, sino que pertenece en gran medida al universo de lo simbólico. Entendido esto último como un sistema de creencias que puede tener mayor o menor fundamento empírico de acuerdo con qué orden de legitimidad estemos tratando.

“La mejor manera de describir la legitimación como un proceso, es decir que constituye una objetivación de “segundo orden”. La legitimación produce nuevos significados que sirven para integrar los ya atribuidos a procesos institucionales dispares. La función de la legitimación consiste en lograr que las objetivaciones de “primer orden” ya institucionalizadas lleguen a ser objetivamente disponibles y subjetivamente plausibles” (Berger y Luckman, 1995:120-121)

Es decir la legitimación de acuerdo con esta definición es una forma de explicación, o dicho de otra forma, de otorgarle sentido o validez cognoscitiva a un determinado orden institucional. Es una forma de explicar o justificar determinados imperativos de orden práctico. Es cierto que no es la única definición posible y que al respecto existe una abundante polémica, pero mi interés particular es desarrollar la idea que, todo tipo de legitimidad y de dominación política, por democrática que sea, está sustentada por ciertas

creencias de orden simbólico. Y que no es posible analizar un orden social y político sólo desde los supuestos de lógicos implícitos en el sistema.

Coincidiendo con lo planteado por Max Weber, asumiremos que los diferentes tipos de legitimidad de toda autoridad, se corresponden con determinados tipos de dominación. Sin entrar en mayores detalles sobre los tres tipos puros de dominación que plantea Weber, me interesa considerar el sistema democrático: Como la forma de “dominación legal-racional” weberiana (Max Weber, *Economía y Sociedad*: 1983) para intentar introducir un marco explicativo de los acontecimientos políticos desde el año 1999 hasta la fecha.

Es decir la democracia liberal puede entenderse perfectamente como un sistema técnico-legal para que un determinado grupo dominante legitime su posición hegemónica, sobre grandes sectores dominados.

“El propio Weber asume de modo implícito que la legitimidad no se limita a cumplir una función de autojustificación, en tanto afirma que ésta representa una mediación importante entre el mandato y la obediencia.

Se puede aducir que los dominados aceptan la *leyenda* o *ideología* de los dominadores como consecuencia de una *falsa conciencia* que les impide a los primeros conocer o tomar conciencia de sus *verdaderos* intereses.” (Serrano Gómez : 12)

Ahora bien para que esto suceda es necesario que no se destruyan las creencias sobre las cuales se sustenta todo el aparato de legitimación política. En síntesis, puede afirmarse que uno de los secretos de la política es que ésta funciona en base a la ilusión, como condición necesaria pero no suficiente, para sostener un determinado tipo de dominación.

## **1999, el voto por “El cambio”**

No puede decirse que 1999 fue el año en que los argentinos comenzaron a descreer de la clase política. Todo el período del gobierno menemista estuvo caracterizado por el escándalo y las críticas a los dirigentes políticos y, si abusando de las premisas de este trabajo, nos retrotraemos al período alfonsinista, la desilusión con la democracia y la clase política no constituyen ninguna novedad.

A partir del gobierno de la Alianza se produce un cambio sí, pero de características diferentes a las esperadas, se produce un cierto tipo de ruptura que no tiene que ver ya con la ilusión o desilusión, sino con la *creencia*.

Es cierto que definir el término, creencia, presenta algunas dificultades puesto que significa tanto dudar, como tener plena convicción o confianza. Pero el significado de la palabra que intento rescatar es el contrario de *certeza*. Es decir al final o en la muerte de una creencia suele encontrarse la certeza. En el sentido sociológico en que intento definir el término, puede decirse que para que exista este tipo de creencias, debe haber un terreno en torno de ellas dónde no haya certezas bien definidas.

“Nadie va a misa porque ha leído a Santo Tomás ni incluso a San Mateo, así como nadie se vuelve comunista porque ha leído a Marx o a Lenin”  
(Debray, 1981: 175)<sup>1</sup>

Es decir la creencia en este sentido está en la base de la ilusión y la legitimidad democrática, es el voto de confianza que permite la aceptación de los criterios de previsibilidad, pautas y obligaciones necesarios para el desenvolvimiento del sistema.

“Las grandes afiliaciones colectivas, las conversiones ideológicas masivas (...) lejos de hallar su principio de inteligibilidad en una lógica objetiva de las ideas, se explican a partir de la creencia como confianza acordada y fuente de pertenencias e identidades colectivas” (Emilio De Ípola, 1997: 14)

Si bien durante el período anterior al '99 ya era evidente la caída del empleo producto del modelo de acumulación especulativo financiero y que la entrada de dinero por las privatizaciones de empresas se había agotado; la ilusión del uno a uno, del crédito fácil –aunque a tasas exorbitantes- y de la inclusión en el primer mundo, sustentaba un sistema de creencias donde a pesar de la disolución de los lazos sociales aun podía mantenerse una lógica de sistema. Aunque las condiciones macroestructurales apuntaban directamente hacia la crisis, el poder político logró mantener la ilusión de que si había problemas, estos no eran producto del modelo económico, sino en todo caso, desajustes propios de los personajes de turno que podrían ser removidos a través del voto popular. Pero que a su vez consiguieron erigirse a sí mismos como los únicos garantes de la estabilidad del modelo, amenazando con caer en el caos económico ante organismos internacionales de crédito.

En síntesis la situación previa al '99 era crítica, la legitimidad de las instituciones y del poder político estaba profundamente erosionada producto de años de políticas antipopulares y del desgaste del vínculo social que provocó el neoliberalismo, pero aun conservaba algún sentido la proposición *estamos mal pero vamos bien*. Dentro de ese contexto, la palabra que comenzó a escucharse en todas partes era *cambio* y es así como llegó al poder una alianza que prometía dicho cambio, pero con un presidente conservador. A la sazón sólo resultaba un cambio de personajes y la promesa de mayor

eficiencia burocrática y moral. Pues como sostenía el ex presidente De La Rúa en un reiterativo corto publicitario: *conmigo, un peso un dólar*.

A la alianza de gobierno entre el radicalismo y el Frepaso, los primeros aportaron su candidato más conservador y los segundos se configuraron como un grupo garante de la honestidad y la transparencia política. Lo cierto es que De La Rúa como garante del orden de las grandes trasnacionales privatizadas, difícilmente pudiera representar al electorado histórico del radicalismo, la clase media urbana, los pequeños comerciantes y los sectores rurales de menor envergadura, que eran por otro lado uno de los sectores más castigados por *el modelo*. El Frepaso estaba constituido prácticamente sólo sobre un discurso de oposición basado en la honestidad y la transparencia en la gestión, para de esa forma, no confrontar demasiado con los simpatizantes del liberalismo ni con el “voto de los mercados” (Sidicaro, 2001: 72) No tenía ni tradición ni convicciones políticas que no fueran más allá de la propuesta moral. Dicho sea de paso el discurso de la corrupción y el manejo clientelar de los funcionarios públicos, encajaba perfectamente con los diagnósticos de achicamiento del estado y fortalecimiento de los nuevos movimientos sociales y las ONG´s propuestos por el FMI y el BM.

Instalada la Alianza en el poder, las fricciones internas y la falta de rumbo político no tardaron en aparecer y agudizarse.

El agotamiento de los recursos del estado hizo que ya no fuera negocio prestar dinero a La Argentina a tasas de usura. Un matutino publicaba el 29 de noviembre de 2001: “Las tasas entre bancos llegaron al 95% en pesos por un día de plazo, los préstamos en dólares se mantuvieron estables, pero también a tasas muy altas: 35%”. (Clarín, 29/11/2001)



El 2 de diciembre, el mismo matutino publicaba la noticia de las nuevas medidas económicas “Con un tono docente poco habitual en él, Domingo Cavallo explicó ayer las medidas que impactarán de lleno en la vida cotidiana: cambian la manera en que hay que desenvolverse en la economía. De ahora en más y por **90 días** rige una severísima restricción para los retiros de dinero en efectivo: serán de 250 pesos por semana. Un total de 1.000 pesos por mes. Esa limitación es para todas las cuentas bancarias, incluso aquellas en las que están depositados los salarios.” (Clarín, 2001)

Se había instalado *el corralito*, partir de ese momento se terminaron de asentar las bases para los acontecimientos del 20 y 21 de diciembre de 2001.

Dejo de lado la cuestión de los saqueos previos a la caída de De La Rúa, pues la línea que intenta tomar este trabajo sigue otro rumbo. Pero la noche en que el ex presidente declaró el estado de sitio, puso abiertamente de manifiesto lo que venía demostrando desde hacía tiempo, la falta de un sistema de reglas y garantías que aseguren la reproducción del sistema. El error político más grave que cometió el gobierno de la Alianza fue confirmar públicamente, fehacientemente, la falta de instituciones. Otorgó la *certeza* que terminó de destruir la débil *creencia* que sostenía al aparato político. La violación de la propiedad privada, último bastión de las democracias capitalistas, por medio del Estado fue la confirmación, la manera más eficaz de destruir los débiles lazos que quedaban en la creencia de un sistema legal-racional de dominación. A partir de ese momento y a diferencia de otras crisis económicas, la certeza en la ausencia de una garantía mínima de legitimidad, se constituyó en un punto de inflexión en la conciencia de los sujetos. La crisis de representatividad

se transformó en total y el país quedó virtualmente acéfalo por un período de tiempo, que en ese momento era absolutamente incierto.

“Si necesitara derramar la sangre de alguno, hágalo con la justificación conveniente y por causa manifiesta. Pero sobre todo, absténgase de quedarse con sus bienes, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio.” (Maquiavelo, 1995: 66)

Con todas las instituciones socavadas desde sus cimientos y un estado casi inexistente que hacía décadas que no representaba los intereses de las mayorías, después de varios intentos fallidos, sólo pudo recomponerse cierto orden institucional con lo que quedaba del aparato político clientelar que manejaba el ex presidente Eduardo Duhalde.

El cambio se había operado, pero no en el sentido votado en el 99 ni mucho menos en el modelo económico, sino al nivel de la conciencia de los sujetos. Si algo quedaba de tradición en algunos votantes, la brutal forma en que la etérea sustancia del orden democrático capitalista fue presentada a los sujetos, terminó por destruir la débil creencia en el orden institucional.

### **Representantes y representados**

La legitimidad de la democracia a diferencia de las dictaduras está obligada a construirse sobre la distribución de bienes materiales, al menos (como propuesta de mínima) para asegurar a la clase política un cierto caudal de votos. Cuando los órdenes de dominación política y de dominación económica coinciden en sus objetivos, los mecanismos de la democracia se ven facilitados en su funcionamiento. En los países desarrollados donde los problemas de marginalidad se encuentran resueltos, el auge empresario suele

coincidir, a grandes rasgos con el interés nacional. Pero en el caso de la Argentina, prevaleció un sector rentista financiero, nacional e internacional, que lucró con el endeudamiento externo, vació al país y prácticamente arruinó al sector productivo, especialmente a la industria.

En el caso argentino se ha conformado una élite de dominación económica, que en muchos, casos sus principales intereses ni siquiera se relacionan con nuestro territorio.

“Este actor etéreo, pero para nada desinteresado, ha constituido en los años recientes, un singular Partido de los Negocios con estrechas conexiones con los actores socioeconómicos predominantes.

En las filas del Partido de los Negocios se encuentran desde ex operadores de mesas de dinero hasta antiguos lobbistas (...) la prensa la hacen los especialistas en explicar como evitar *la caída en el abismo* y la opinión pública la auscultan técnicos en encuestas inconsistentes y tendenciosas”.

(Sisicaro, 2001: 100)

En cuanto al poder político, dada la complejidad que supone interpelar un electorado sumamente heterogéneo -producto haber desaparecido los grandes colectivos como consecuencia de la fragmentación del tejido social- ve facilitada su condición de posibilidad y de existencia, prestando servicio a las élites económicas y no a los sujetos que supuestamente representa.

Sin embargo, por diversos motivos el neoliberalismo no resultó beneficioso para aquellos que necesitaban un caudal electoral importante para mantener sus estructuras partidarias, la prueba está en el costo político que tuvo que pagar el radicalismo por haber ignorado a su electorado, deslegitimado su propio Gobierno y las instituciones que debía representar. La

Unión Cívica Radical fue duramente castigada y responsabilizada por la crisis de 2001, el patético 2,3% <sup>2</sup> que obtuvo su candidato Leopoldo Moreau fue el golpe electoral más duro jamás experimentado en la historia del tradicional partido.

La fragilidad de la estructura de los partidos políticos en general, además de las causas mencionadas, se ve aún más comprometida con la última reforma a la Constitución Nacional, al eliminarse el anterior sistema de *colegio de electores* se contribuyó a debilitar la ya deteriorada *organicidad* interna de los partidos. Hoy la elección presidencial se realiza por voto directo, o sea el presidente se elige en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde se concentra la mayor parte de la población del país. Como ejemplo, pueden citarse las últimas elecciones presidenciales del 2003, donde el candidato Menem <sup>3</sup> no pudo imponerse a Néstor Kirchner, pese a haber ganado en doce provincias, contra sólo siete en las cuales se impuso el segundo. Kirchner pudo imponerse principalmente por el fuerte apoyo en caudal de votos que le otorgó el aparato bonaerense que manejaba el ex presidente Eduardo Duhalde.

Es más esta reforma permite que cualquier pequeño partido del interior, sin ningún compromiso o relevancia en una elección presidencial, pueda con un modesto caudal de votos (presupuesto) colocar alguna banca en el parlamento y jaquear al Gobierno de turno trabajando para cualquier grupo que lo haya impulsado al poder, independientemente de los intereses de sus representados en las urnas.

Es evidente que el proceso de desinstitucionalización; fragmentación social; los acontecimientos posteriores a la caída de la Alianza; sumados a la debilidad interna de los partidos políticos, contribuyeron a formar a votantes

más escépticos, que ya no tienen un apego fanático por las tradiciones políticas. Pero estos nuevos votantes, son también sujetos mucho mejor informados, descreídos de los grandes relatos trascendentales, que miran más por sus propios intereses. O bien si lo hacen pensando en algún de interés de tipo colectivo, el apoyo o el voto de confianza otorgado a los candidatos es mucho más exigente y selectivo. Luego de haber experimentado la falta total de garantías por parte de las instituciones de la democracia, el apoyo a los candidatos o a los partidos políticos se convirtió en efímero y con arreglo a fines concretos. Por lo tanto es un electorado mucho más complejo escurridizo y difícil de interpelar como colectivo a través de un discurso.

“Los grupos y los individuos se encuentran frente a las consecuencias de la complejidad de la vida social y sus anteriores certezas se ven afectadas, de modo principal, por el debilitamiento de las instituciones religiosas y estatales que habían sido productoras y proveedoras de significados para pensarse a sí mismos y al mundo circundante” (Sidicaro, 2003: 11)

Por supuesto estas mismas características de fragmentación y complejidad adquieren las protestas sociales, las cuales en buena medida se diluyen, fragmentándose de acuerdo con los intereses particulares de grupos reducidos sin poder alcanzar la magnitud de un verdadero movimiento de interpelación al poder hegemónico. Aunque en este particular prefiero hacer un paréntesis y dejar de lado el caso de la protesta *piquetera*, dado que desde los sucesos de Cutralcó hasta la fecha, se han desarrollado diversos fenómenos bajo la misma denominación y merecen un tratamiento más atento y específico del que intenta este trabajo.

En general las protestas sociales han asumido la forma directa como método de reclamo, esto bajo el supuesto que al no estar mediatizadas por intereses corporativos constituyen un verdadero acto republicano que goza de absoluta legitimidad y consigue presionar directamente sobre el Gobierno. Como por ejemplo el caso del famoso Blumberg o de cualquier otro actor que se movilice de acuerdo con fines específicos.

El sociólogo Colin Crouch opina al respecto:

“Aquellos que piensan que el mejor método para defender, por ejemplo, la causa de la comida saludable, es organizar un grupo de presión para influir sobre el gobierno directamente, ignorando la vía de la política electoral, deben tener en cuenta que las industrias alimentaria y química van a lanzar verdaderos buques de guerra contra sus frágiles botes de remos.” (Crouch, 2004: 33)

Sin embargo y pese a todo lo acontecido, uno de los datos más sorprendentes de los comicios presidenciales de 2003, fue un cambio de actitud en la abstención del voto como forma de impugnación al sistema, protesta que se venía manifestando desde octubre de 2001. En el 2003 se registró solamente un 2,4% entre voto en blanco y anulado<sup>4</sup>. Lo cual corrobora de alguna manera lo expresado en cuanto a la madurez y mayor racionalidad de los votantes.

Frente a la crisis de representación ante la cual estábamos inmersos, este 2,4% se comprende como claro un apoyo al sistema democrático. El, *que se vayan todos*, sonó con mucha fuerza ante la irritación popular en la protesta callejera. Pero llegados los comicios, entre patear el tablero caprichosamente y bregar por un cambio al interior del sistema democrático, la gente se inclinó

masivamente por el apoyo al sistema institucional. Aunque queda claro que el apoyo no es incondicional ni mucho menos se dirige hacia los gobernantes.

### **En busca de un paradigma**

Esta idea de la doble dimensión de la política al menos como lo he mencionado anteriormente para la democracia, consiste en formular un universo de ideas o creencias que sean lo suficientemente aceptadas de forma general, para poder lograr la necesaria cohesión o sentido de pertenencia, que permita el funcionamiento del sistema. Es decir la sensación de tener un ordenamiento lógico que otorgue cierta previsibilidad o sentido a la vida cotidiana. Sin embargo esta doble dimensión tiene como condición *sine qua non* un correlato material que permita que esas creencias se cumplan o que al menos exista la posibilidad de que así sea. Es en este punto donde comienza a necesitarse la sólida presencia las Instituciones de la Nación.

Es decir, las obligaciones insoslayables de un estado de derecho como las necesidades básicas, la educación, la salud, el trabajo, un orden reglamentario, o sea la justicia; no basta con que se incluyan dentro de un discurso ideológico, es necesario que este sistema de creencias, tenga un anclaje material y concreto en la vida de los sujetos.

Para el poder económico hegemónico, todo esto representa una traba a la alta movilidad y a la manipulación discrecional necesarios para poder realizar las mayores extracciones de capital con los menores obstáculos. Por eso muchas veces éstos grupos hegemónicos son más propensos a los gobiernos autoritarios que a los democráticos. Sin embargo el autoritarismo suele ser un aliado difícil de controlar y prescindente de la legitimidad necesaria que

asegure un *status quo* favorable para los *buenos negocios*. El ideal para estos grupos, son las democracias dóciles con políticos dependientes que tengan su propia posibilidad de existencia en mantenerse en sus cargos y asegurar así la reproducción legítima de un orden de dominación desigual, allí es donde se produce la simbiosis perfecta. Es decir con los *empleados políticos* del Partido de los Negocios. Además el manejo discrecional de fondos se convierte en una herramienta funcional tanto para los políticos que los distribuyen a través de relaciones clientelares, como para los proveedores de fondos de dichos políticos; puesto que el manejo de recursos cara a cara, debilita a las instituciones y fortalece los lazos de dependencia personales. La factura, claro está, se le pasa luego al Estado.

Dentro de un contexto de extrema vulnerabilidad y pobreza como el de la Argentina actual, la presión y el lobby no requieren grandes esfuerzos. Si la presión en este momento no es mayor, es tan sólo por el riesgo de una nueva caída del sistema y no porque estos grupos hayan quedado deslegitimados en diciembre de 2001. En un país con millones de personas sumidas en la miseria y sin ninguna perspectiva futura, la situación social es altamente imprevisible.

Por lo tanto, la primera ocupación del actual gobierno, fue reconstruir un marco de confianza e intentar devolver credibilidad al sistema racional-legal dentro del atolladero que significa un Estado en bancarrota y con todas sus instituciones en crisis. Bajo el *slogan* "Argentina un país en serio", que de tan necesario se convierte en patético, se intenta apelar a fórmulas que reconstruyan lazos ideológicos apelando muchas veces a tradiciones que ya no tienen demasiado eco en la sociedad. Tal vez su influencia pueda ser mayor en los sectores de menos recursos donde las proposiciones recargadas de



argentinidad, tienen una mejor aceptación que en los escépticos sectores de clase media. Probablemente y en una buena medida la mayor consistencia del voto de los sectores populares se deba más al manejo clientelar que al apego por las tradiciones partidarias, situación totalmente ajena a los sectores medios que si en alguna medida se beneficiaron con la convertibilidad, fueron también las principales víctimas del corralito.

El intento del actual gobierno por construir un *movimiento transversal*, una suerte de peronismo *sui generis* goza por el momento de algunas ventajas; como por ejemplo, la que le otorga la falta de propuestas alternativas por parte de otras fuerzas; el descrédito en el que cayeron los postulados neoliberales luego de la experiencia del corralito; el no tener que haber pagado el costo político que significó la salida de la convertibilidad, situación que además le devuelve al gobierno las herramientas para intervenir en política económica y por último el hecho de intentar construirlo al interior del único aparato político que prácticamente que quedó en pie en la Argentina, después de diciembre de 2001.

Pero aquí creo yo se terminan las ventajas; puesto que el justicialismo no sale indemne de la debacle de los 90, la mayoría de sus dirigentes están seriamente comprometidos en el proceso de vaciamiento de la década pasada y la tentación de los grupos económicos concentrados sigue siendo muy fuerte, sobre todo para los dirigentes, gobernadores e intendentes que manejan aparatos de pequeña y mediana envergadura, para lo cuales arriesgar su propio futuro en un emprendimiento político todavía no muy claro es una apuesta que consideran con suma cautela.

El actual gobierno, como he insistido hasta ahora, necesita generar el necesario consenso ideológico para ganar votos, pero necesita también desesperadamente mostrar resultados materiales concretos. Algunos gestos de gobierno como el descabezamiento de ejército; la purga a la Corte Suprema de Justicia; la posición menos obsecuente frente a los acreedores de la deuda; su posicionamiento frente a los organismos de derechos humanos o la continuidad y lanzamiento de planes sociales para los sectores más vulnerables, pueden entenderse dentro de un cambio de rumbo con respecto de la anterior política económica. En general tuvieron buena aceptación popular y le generaron al gobierno una muy buena imagen. Sin embargo los mayores problemas estructurales siguen sin ser discutidos.

Para comenzar a discutir dichos problemas estructurales hace falta definir un proyecto de país de una forma más consistente que: *un país en serio*. La definición estratégica del modelo de país a seguir es vital para diseñar políticas de mediano y largo plazo, para entonces sí poder avanzar sobre cuestiones que el gobierno actual, más allá de sus declaraciones de buenas intenciones, está soslayando. Como por ejemplo, una reforma tributaria seria, que permita morigerar los efectos de la desigual distribución de la riqueza y que el anunciado crecimiento económico alcance a mayor parte de la población y permita mejorar la calidad de vida de la gente, prescindiendo de planes de asistencia social.

Por otra parte y a pesar de una posición de negociación de mayor firmeza, se soslaya una discusión de fondo sobre el tema de la deuda externa como uno de los problemas estratégicos de la Nación. Nada se ha dicho a cerca de qué parte de la deuda debe considerarse legítima y cual no, a pesar de haber en ese

sentido un fallo en firme de la justicia argentina<sup>5</sup> que declara ilegítima la mayor parte de dicha deuda. Al respecto podría abundar en detalles pero doy sólo un dato de lo disparatado del tema: A pesar una negociación más sólida, y de los onerosos pagos que no dejaron de realizarse desde la devaluación a la fecha, la deuda externa argentina aumentó en 35.500 millones de dólares. (Le Monde Diplomatique, 8/2004: 3)

Otro aspecto importante sobre el que se hicieron muchos anuncios pero hubo pocos avances, es sobre la revisión minuciosa de los contratos de servicios públicos y el control y seguimiento de los concesionarios por parte del estado. Las empresas privatizadas son el caso paradigmático, donde se concentra la articulación principal entre política, economía y poder y en donde el gobierno actual parece estar dispuesto a poner la lupa, sólo sobre aquellos concesionarios que se presentan como inconvenientes a su estrategia política partidaria.

El sólo hecho de mantener un tipo de cambio favorable a las exportaciones no puede producir por sí mismo el proceso de sustitución de importaciones, reactivación industrial y generación de empleos. El importante crecimiento de la producción manufacturera registrado en 2003, registra en comparación con los magros valores anteriores con los que es comparado y se explica por la recuperación de parte de la capacidad industrial ociosa instalada. Junto con el excedente captado por el sector industrial se registra un aumento del 6% en promedio, de la duración de la jornada laboral.<sup>6</sup> Mientras que los índices de ocupación no muestran ningún avance.

“En otras palabras, si bien es cierto que en el contexto macroeconómico se ha producido un cambio ostensible, la trayectoria fabril post convertibilidad

parece sostenerse sobre pilares semejantes a los del “modelo de los ‘90” (Le Monde Diplomatique, 8/2004: 3)

En síntesis, la recuperación de las Instituciones de la Nación aparece como condición necesaria en primer lugar, para reconstruir la credibilidad en un sistema racional-legal previsible que se inserte dentro de un proyecto de País más claramente definido, donde puedan generarse inversiones genuinas y un desarrollo económico pautado sobre las bases de la generación de empleo y distribución más equitativa de la riqueza; pero a su vez y fundamentalmente como freno al avance de grupos mafiosos y un poder económico hegemónico que no tiene ningún interés particular el país, pero que asume una posición de liderazgo claramente dominante y posee un control casi discrecional de una importante cantidad empresas estratégicas para la Nación.

## Bibliografía

- Peter Berger y Thomas Luckman, 1968 (1995) *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires, Amorrortu
  
- Emilio De Ípola, 1997, *Las cosas del creer. Creencia, lazo social y comunidad política*, Buenos Aires, Espasa Calpe/Ariel
  
- Ricardo Sidicaro, 2001, *La crisis del estado. Y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, Buenos Aires, Libros del Rojas  
UBA
  
- Nicolás Maquiavelo, 1502, (1994) *El príncipe*, Madrid, Larmor S.A.
  
- Enrique Serrano Gomez, *Legitimación y Racionalización. Weber y Habermas la dimensión normativa de un orden secularizado*. México, Anthropos
  
- Régis Debray, 1981 *Critique de la Raison Politique*, París, Gallimard
  
- Colin Crouch, 2003 (2004) *Posdemocracia*, Madrid, Taurus
  
- Ricardo Sidicaro, 2003, “Consideraciones sociológicas sobre la Argentina en la Segunda Modernidad”, *Revista Universitaria Semestral*, Universidad Nacional del Litoral, año XIII, N°24, Santa Fe

- E. Basualdo, 2003, *Las reformas estructurales y el Plan de convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y crisis de la valorización financiera.* Buenos Aires, Realidad Económica, N° 200
  
- Editorial, 2001, “La crisis de la deuda: Necesidad de fondos”, diario Clarín, 29/9/2001, Buenos Aires
  
- Editorial, 2003, “Todos los resultados”, diario La Nación, 30/5/2003, Buenos Aires
  
- Martín Schorr, 2004, “Redistribuir para afianzar la recuperación” *Le Monde diplomatique*, “El dipló”, Argentina, Año VI N°62, Capital Intelectual S.A.

## Notas

<sup>1</sup> En: De Ípola, “Las Cosas del Creer”, 1997: 13

<sup>2</sup> Fuente: Diario “La Nación”, 30/5/03

<sup>3</sup> Recordemos que Menem terminó por no ir a ballottage, debido a que la correlación de fuerzas no le resultaba favorable y era técnicamente imposible superar en número a Kirchner.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> El fallo del juez Ballesteros se produjo luego de haber caducado el plazo del juicio, por lo tanto su valor legal es casi simbólico, no obstante eso no impide que el tema sea retomado por el parlamento, tomando como eje la investigación legitimada por el fallo de la justicia argentina.

<sup>6</sup> Fuente: INDEC